

# Las formas de la democracia

A cuarenta años  
(1983-2023)

**Mauro Benente  
y Diego Conno  
(compiladores)**

Cristian Romera, Diego Conno, Diego Fernández Psychaux, Eduardo Rinesi, Iván Gabriel Dalmau, Mauro Benente, Sabrina Morán, Sebastián Barros, Valeria Thus y Virginia E. Zuleta



**EDUNPAZ**  
Editorial Universitaria



# **Las formas de la democracia**



# Las formas de la democracia

A cuarenta años  
(1983-2023)

Mauro Benente  
y Diego Conno  
(compiladores)

Cristian Romera, Diego Conno, Diego Fernández Peychaux, Eduardo Rinesi, Iván Gabriel Dalmau, Mauro Benente, Sabrina Morán, Sebastián Barros, Valeria Thus y Virginia E. Zuleta

Instituto Interdisciplinario  
de Estudios Constitucionales (IIEC)



Colección **Horizontes I+D+i**

---

Benente, Mauro

Las formas de la democracia : a cuarenta años : 1983-2023 / Mauro Benente ; Diego Conno ; prefacio de Darío Kusinsky. - 1a ed. - José C. Paz : Edunpaz, 2023.

Libro digital, PDF - (Horizontes I + D + i. IIEC)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-8262-34-5

1. Democracia. 2. Derechos Humanos. 3. Historia Política Argentina. I. Conno, Diego. II. Kusinsky, Darío, pref. III. Título.

CDD 320.0982

---

1ª edición, diciembre de 2023

© 2023, Universidad Nacional de José C. Paz. Leandro N. Alem 4731

José C. Paz, Pcia. de Buenos Aires, Argentina

© 2023, EDUNPAZ, Editorial Universitaria

**ISBN:** 978-987-8262-34-5

### **Universidad Nacional de José C. Paz**

Rector: **Darío Exequiel Kusinsky**

Vicerrectora: **Silvia Storino**

Secretaría General: **María Soledad Cadierno**

Secretaría de Ciencia y Tecnología: **Pilar Cuesta Moler**

Director del Instituto Interdisciplinario de

Estudios Constitucionales: **Mauro Benente**

Directora General de Gestión de la Información y

Sistema de Bibliotecas: **Bárbara Poey Sowerby**

Jefa de Departamento Editorial: **Blanca Soledad Fernández**

División Diseño Gráfico Editorial: **Jorge Otermin**

Coordinación editorial: **Paula Belén D'Amico**

Corrección de estilo: **Mariangeles Carbonetti y María Laura Romero**

Foto de tapa: **Diego Conno, de la serie *Territorios del poder* (acuarela sobre papel)**

Publicación electrónica - distribución gratuita

Portal EDUNPAZ <https://edunpaz.unpaz.edu.ar/>



Licencia Creative Commons - Atribución - No Comercial (by-nc)

Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga con fines comerciales.

Tampoco se puede utilizar la obra original con fines comerciales. Esta licencia no es una licencia libre. Algunos derechos reservados: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es>

# Índice

## *Presentación*

DARÍO KUSINSKY

---

9

## *Prólogo*

MAURO BENENTE Y DIEGO CONNO

---

15

## *Guerra de Malvinas y fragmentación identitaria.*

*La crisis de la última dictadura cívico-militar en la Argentina*

SEBASTIÁN BARROS

---

25

## *Democracia procedimental y populismo. Acerca del temor a los muchos en el siglo XXI*

SABRINA MORÁN

---

57

## *Democratización populista, instituciones y pueblo. El proceso de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual*

MAURO BENENTE

---

83

*Experiencias de la democracia. Entre el discurso de los derechos humanos y la demanda de reconocimiento a la identidad del colectivo travesti/trans*

VIRGINIA E. ZULETA

125

---

*La Constitución y lo político, a cuarenta años de su recuperación. Apuntes sobre la justicia constitucional y la (in)justiciabilidad de las cuestiones políticas*

CRISTIAN ROMERA BELIS

149

---

*Neoliberalismo y colonialidad. La liberación según Felipe Guaman Poma de Ayala*

DIEGO FERNÁNDEZ PEYCHAUX

181

---

*El neoliberalismo como gobierno mediante y para la desigualdad. Una revisión de la (ultra)derecha neoliberal desde la grilla de la gubernamentalidad*

IVÁN GABRIEL DALMAU

211

---

*Auge negacionista: el liberalismo “malogrado” para enfrentarlo*

VALERIA THUS

239

---

*La democracia y nosotros*

DIEGO CONNO

271

---

*Epílogo. Bleu, Blanc, Rouge*

EDUARDO RINESI

293

---

*Sobre las personas autoras*

307

---

*Guerra de Malvinas  
y fragmentación  
identitaria*

*La crisis de la última  
dictadura cívico-militar  
en la Argentina*

---

SEBASTIÁN BARROS



## INTRODUCCIÓN

*Para decirlo en otros términos, lo que necesitaba en estos momentos el pueblo argentino no era que el Ejército y la Marina entraran en Malvinas sino en los cuarteles; pero es bastante evidente que lo primero es un procedimiento dilatorio para seguir evitando lo segundo.*

Julio Cortázar, 29 de abril de 1982

Este trabajo se pregunta por las consecuencias políticas de la Guerra de Malvinas (2 de abril al 14 de junio de 1982) y tiene un doble objetivo. Primero, apuntamos a analizar el acontecimiento de esta guerra como un mojón que condensó toda una serie de procesos que marcaron fundacionalmente a la transición a la democracia en la Argentina. El sentido de unidad que generó el desembarco en las islas y la certeza de su agotamiento con la derrota militar fueron sin duda dos aspectos que le dieron un carácter particular a la caída de la dictadura cívico-militar y a los primeros movimientos de la vuelta a la democracia. A cuarenta años de la apertura democrática, el segun-

do objetivo es, si se quiere, más coyuntural. Asistimos en Argentina a un reverdecimiento de discursos políticos que traen al ruedo de la esfera pública la pretendida novedad de un discurso liberalizante de la economía y una afirmación de los supuestos obstáculos que produciría el sobredimensionamiento del Estado para el desarrollo productivo; discursos que, a su vez, son acompañados por la explícita negación de la represión ilegal entre 1976 y 1983 y en los que vuelven a resonar la cobardía acusatoria hacia “el socialismo” y “los comunistas”. Frente a estos procesos nos queda dejar ver que su emergencia es solamente una reaparición y que su enunciación es una repetición que potencialmente abre la puerta a otra tragedia.

El acontecimiento de Malvinas como esa marca fundacional que condensaba el carácter que luego tendría la transición puede ser tratado de maneras diversas. Aquí nos ocuparemos de las consecuencias que tuvo la guerra sobre la dinámica que adquirieron las oportunidades identificatorias. Es por eso que el trabajo comienza con el análisis de dos elementos que le otorgaron forma y contenido al discurso de la dictadura militar. En primer lugar, entonces, nos referiremos al discurso económico con que se presentó el “Proceso de Reorganización Nacional” (en adelante Proceso) y repasaremos sus efectos inmediatos más relevantes para el argumento que presentamos. En segundo lugar, analizaremos el carácter que asumió la represión ilegal en el discurso dictatorial. En ambos casos, los principales efectos de ambas estructuras discursivas que orientaron las prácticas gubernamentales fueron la fragmentación y el debilitamiento de las identificaciones políticas que predominaban en la formación política argentina. En tercer lugar, se expondrá lo que es el argumento central del trabajo. Desde el punto de vista propuesto aquí, la Guerra de

Malvinas ofreció una posibilidad de identificación a toda una serie de diferencias que hicieron eclosión como consecuencias de la política económica y de la represión estatal ilegal desatadas por la dictadura. Por último, analizaremos las consecuencias políticas inmediatas de la crisis del Proceso luego de la derrota militar. En este sentido, se concluye que la crisis generó una profundización del proceso de fragmentación identitario que se venía desarrollando en la Argentina desde mediados de los años setenta.

#### **EL DISCURSO ECONÓMICO DE LA DICTADURA**

Pensar en términos de consecuencias y efectos, sin caer en pretensiones de causalidad directa difíciles de probar y de aceptar en las ciencias sociales, siempre implica tener en cuenta cierta estructuralidad relativa que va más allá de los procesos parciales que tomamos como objeto de análisis. Esta idea de estructuralidad relativa es central para analizar todo proceso político porque es ella la que crea las condiciones de posibilidad para los eventos que específicamente pretendemos estudiar. Es una estructuralidad en tanto implica la sedimentación de ciertos significados que están disponibles para los sujetos políticos, pero, al mismo tiempo, siempre es relativa en tanto nunca termina de sedimentarse plenamente ya que estos significados van transformándose a medida que son articulados en las prácticas que esos sujetos desarrollan. Desde el punto de vista propuesto aquí para el estudio de la constitución y articulación de identidades políticas, la relativa estructuralidad en la que se producen los acontecimientos de Malvinas funciona a la vez como límite y como posibilidad para las prácticas de los sujetos. Esto significa que hablar de una relativa

estructuralidad implica algo más que un simple contexto. Esta estructuralidad es relativa en tanto nunca está completamente cerrada en sí misma, sobredetermina las posibilidades subjetivas, facilitando ciertos procesos y obstaculizando otros.<sup>1</sup>

¿Cuál era esa relativa estructuralidad a principios de los años ochenta? En términos de la constitución de identidades políticas los dos elementos que fueron centrales en el andamiaje identitario del llamado Proceso fueron, por un lado, la idea fuerza de liberalización de la estructura económica nacional y, por el otro, la idea de “guerra sucia”, eufemismo que resumía el funcionamiento de la represión estatal ilegal sobre la ciudadanía. Repasaremos brevemente estos dos contenidos que nos parecen centrales para entender mejor los procesos políticos que se desataron alrededor de la Guerra de Malvinas, comenzando por el discurso y la política económica de la dictadura. Las ideas económicas del gobierno militar no eran nuevas en la política argentina en 1976, ni tampoco eran patrimonio exclusivo de la Junta que asumió el poder el 24 de marzo de dicho año. Después del derrocamiento de Perón en 1955, el discurso económico liberalizante era uno de los elementos centrales que estructuraba el antagonismo peronismo-antiperonismo que dividió (y divide) a la formación política argentina desde mediados del siglo XX. En este sentido, si bien la gestión económica estatal de la dictadura “no puede ser considerada como una gestión liberal en términos estrictos” (Castellani, 2008: 132), estas ideas se definían a sí mismas como una crítica del modelo de desarrollo representado por el peronismo. Su propuesta

---

1. La noción de estructuralidad relativa se desprende de los análisis de Ernesto Laclau (1990).

consistía en la apertura de la economía al mercado mundial y en la reducción de la actividad del Estado en la esfera económica. Se enfatizaba principalmente el control de la inflación y del déficit fiscal como condiciones para restaurar el crecimiento económico sostenido, con lo cual las principales medidas propuestas eran la restricción de la emisión monetaria, la baja de los salarios y el mantenimiento del equilibrio presupuestario por la reducción del gasto y el aumento del ingreso estatales.

Los objetivos de la política económica del Proceso fueron claramente establecidos desde un principio. El 2 de abril de 1976 el ministro de Economía anunció el “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”. En su descripción de la evolución de la economía argentina, José Alfredo Martínez de Hoz denunciaba sus dos patologías más relevantes. Por un lado, “la estatización y regulación creciente de la economía” que no fomentaba el esfuerzo individual y aumentaba el gasto público. Por el otro lado, el carácter de la economía argentina después de la Segunda Guerra Mundial que se había transformado en “un esquema de economía cerrada”, aislada “de toda corriente innovadora en materia de tecnología y sistemas productivos”. De esta manera, el aumento del gasto público provocaba el déficit del presupuesto nacional, déficit que era financiado con emisión monetaria que a su vez provocaba el fenómeno inflacionario que había marcado la economía argentina desde 1946 (Martínez de Hoz, 1981: 21-22). En el discurso de la dictadura militar la inflación era la principal patología de la economía argentina y, desde este punto de vista, las causas de la inflación eran dos: las distorsiones provocadas por ciertas políticas de industrialización y el sobredimensionamiento del Estado.

Para terminar con estas circunstancias la dictadura militar proponía un necesario “cambio de mentalidad, hábitos y actitudes para realizar transformaciones profundas” (Martínez de Hoz, 1981: 12). Desde un comienzo el énfasis de la política económica fue puesto en provocar cambios estructurales que disciplinarían el comportamiento económico de la población, ya que la reestructuración de la economía era la base sobre la cual se asentaría la derrota de la inflación. La lucha contra el aumento del índice inflacionario marcó así el ritmo de la política económica del régimen militar. El mecanismo propuesto para lograr ese efecto disciplinario sobre los actores económicos fue la liberalización de la economía, la apertura del mercado a la economía internacional y la restricción de la participación estatal en la economía doméstica. Sin embargo, luego de completada la primera fase del programa y realizadas las primeras reformas, los niveles inflacionarios seguían siendo un problema (Canitrot, 1980: 33).

Las consecuencias de estas políticas para el sector productivo fueron predecibles. Las pequeñas y medianas empresas fueron las que más sufrieron cuando las importaciones baratas comenzaron a competir con sus productos previamente protegidos. Las consecuencias de esta fase de la política económica del régimen militar fueron la recesión económica y la desindustrialización.<sup>2</sup> El régimen militar fue incapaz de controlar las diferentes variables económicas. Esto implicó que el Proceso dejó de proveer un principio de lectura para la dislocación de los significados compartidos que suponía la inflación. La articulación

---

2. La actividad industrial no creció entre 1970 y 1980. En 1970, la industria representaba el 28 por ciento del PBI, en 1975 era el 28,6, y en 1980 era el 25,4 por ciento. Puede verse Canitrot (1980) y Villarreal (1987).

política de la idea de orden que hegemonizaba el gobierno militar comenzó así a disolverse. La incapacidad de controlar la economía de acuerdo con el orden prometido debilitó las posibilidades políticas de los militares y contribuyó a la inestabilidad de la formación política. La apertura de la economía a la competencia extranjera provocó el desmantelamiento de la producción industrial. El privilegio de la lucha antiinflacionaria implicó que cualquier estrategia de crecimiento quedara a un lado. El sector industrial adoptó una actitud a corto plazo, “postergando todo proyecto de expansión productiva” (Canitrot, 1980: 68). Muchas pequeñas y medianas empresas quebraron como consecuencia de la competencia extranjera. Los problemas económicos de estos productores provocaron que algunos cambiaran a actividades comerciales o especulativas. Muchos de ellos pasaron al sector informal de la economía, disminuyendo así la cantidad de empleadores en la población activa y creciendo el número de trabajadores independientes. Estas dos últimas variables reflejan las consecuencias de la política económica para la pequeña y mediana empresa. Este proceso de desmantelamiento de la industria nacional formó parte, a su vez, de un proceso más complejo de concentración del poder económico. La unificación de intereses sectoriales durante la dictadura militar implicó una homogeneización de los sectores dominantes. Esto se dio alrededor de una élite productiva, financiera y comercial que jugaría un rol muy importante en los tiempos que siguieron (Castellani, 2008).

Este contexto —caracterizado por la recesión, el cierre de compañías pequeñas y medianas y la actitud cortoplacista del sector industrial— tuvo también importantes consecuencias para los sectores populares. La política restrictiva de salarios implicó una reducción drástica del

salario medio. La participación de los asalariados en la distribución del ingreso cayó del 45 por ciento en 1974 al 29 por ciento en 1983 (Castellani, 2008: 139). El poder adquisitivo del salario declinó en porcentajes calculados entre el 40 y el 60 por ciento entre 1974 y 1982 (Villarreal, 1987: 80). Esta política restrictiva de salarios se complementó con una política de diferenciación salarial que modificó la estructura de remuneraciones del sector industrial. El peso del salario básico por horas trabajadas u horas extras declinó, dando lugar a otro tipo de ingreso como bonos por productividad o premios. Esto intensificó diferencias intersectoriales por la diversificación del ingreso entre los distintos sectores económicos. En Argentina, los salarios de trabajadores en categoría similares habían sido parecidos, sin importar el sector de la actividad (Villarreal, 1987). A partir de la política económica del Proceso el rasgo saliente fue la heterogeneización, fragmentación y estratificación de sectores populares que habían sido tradicionalmente más homogéneos.

La reducción del empleo industrial fue también un factor a destacar. Entre 1975 y 1980 el empleo industrial se redujo en un 26 por ciento (Canitrot, 1980: 71). Sin embargo, esta reducción no implicó el incremento del índice de desempleo. El sector terciario absorbió parte del empleo previamente industrial. Este sector incluye una variedad de actividades, todas asociadas a diferentes formas de organización del trabajo, con características distintas en el proceso laboral, diferentes tradiciones culturales y formas de lucha.<sup>3</sup> El crecimiento del trabajo

---

3. Villarreal, por ejemplo, señaló el “bajo nivel de combatividad de estos sectores, su limitada tradición de lucha y su falta de cohesión derivada de su inserción en un mosaico heterogéneo de diferentes actividades” (1987: 83).

independiente fue otra consecuencia de la reducción del empleo industrial. Este tipo de labor es una actividad no-socializada y, como consecuencia, tiene poca tendencia a articularse colectivamente. Los trabajadores independientes eran el 19 por ciento de la población activa en 1974 y el 23 por ciento en 1978 (Villarreal, 1987: 83).

El fracaso económico del régimen militar tuvo así efectos políticos importantes a corto, mediano y largo plazo. Las formas de representación de los sectores populares relacionadas al trabajo y el empleo fueron dislocadas y fragmentadas, un cambio fundamental si se tienen en cuenta las tendencias políticas tradicionales de Argentina. Los cambios en la estructura social y ocupacional entre 1976 y 1981 provocaron la heterogeneización de los sectores populares. La nueva estructuralidad creada por la política económica de la dictadura debe ser rastreada en sus fracasos. El fracaso del régimen militar frente a los objetivos inflacionarios que se propuso se tradujo en el debilitamiento de las identidades y la fragmentación social, características que ya habían comenzado a hacerse visibles en las manifestaciones y prácticas políticas que incipientemente crecían a principios de los años ochenta.

#### **LA NO-CONVENCIONALIDAD DE LA “GUERRA SUCIA” Y LA REPRESIÓN ESTATAL ILEGAL**

Como se dijo más arriba en relación con la política económica, los líderes militares que tomaron el poder en 1976 proclamaron que su objetivo no era meramente terminar con el desorden del gobierno peronista derrocado. Incluso cuando el Proceso fue presentado como una respuesta a la crisis, los generales declararon que su objetivo era transformar las bases de la sociedad argentina. Este objetivo estruc-

tural del gobierno militar se expresaba también en el nombre que se dio a sí mismo, Proceso de Reorganización Nacional. Era una denominación similar al proceso fundacional de la organización nacional-estatal de fines del siglo XIX. De este modo, el nombre también reflejaba el contenido que lo constituía. Esta nueva re-organización intentaba entonces volver a ese momento de grandeza englobado en la idea de la Argentina potencia. Para los militares, la crisis era generalizada; diagnóstico que compartían, además, con otras fuerzas políticas y sociales (Barros, 2002). De la crítica a la crisis, el discurso del Proceso comenzó a construir su propio contenido literal que tomó forma alrededor de la idea de “guerra sucia”. Los resultados, como veremos a continuación, guardan relación con los efectos que repasábamos respecto de la política económica.

Para pelear lo que se llamó “guerra sucia contra la subversión”, la Junta Militar organizó y armó ilegalmente unidades paralelas dentro de las Fuerzas Armadas y la policía. Estas unidades operaban con autonomía e impunidad, pudiendo seleccionar libremente a sus víctimas. Corradi dio una buena descripción de lo que sucedía en esos momentos:

La Argentina era gobernada por un gobierno visible y uno invisible, por dignos oficiales manejando la maquinaria administrativa del Estado y por asociaciones terroristas secretas, por ejecutores ocultos, agentes del Estado *absconditus* que intervenían en la vida cotidiana en ciertos momentos impredecibles para sus víctimas, manteniendo el poder en virtud del extendido terror de sus poderes y a través de la extrema violencia asociada a sus actos (Corradi, 1997: 232).

Así como dijimos anteriormente que las ideas económicas liberales no eran algo novedoso en la Argentina, tampoco lo era que gobiernos militares blandieran la amenaza de un acechante peligro comunista o marxista en el país. Los militares describieron la situación de 1976 como una amenaza al *status quo*. Sin embargo, el acecho comunista y la subsecuente amenaza al estado de cosas eran presentados como elementos de una guerra particular que incluso se extendía más allá del territorio argentino.

La primera particularidad hacía al carácter de esta guerra que, de acuerdo con Roberto Viola, a “diferencia de la clásica, no tiene materializado en el tiempo su iniciación y tampoco la batalla final que corone la victoria. Tampoco tiene grandes concentraciones de hombres, de armas y materiales, ni líneas claramente definidas”.<sup>4</sup> Con el término “guerra sucia”, los militares describían una situación de guerra no convencional en la que las características del enemigo justificaban los excesos. No era una guerra “limpia” en la cual los enemigos se encontraban en un campo de batalla y en la que cada quien sabía quién era el otro. El enemigo se infiltraba, contaminaba el cuerpo social, no vestía uniforme, no se sabía por dónde y cómo atacaría. Para los militares, entonces, las desapariciones, la tortura, el robo de bienes y niños, así como el secuestro de personas, eran consecuencias del tipo de enemigo contra el cual se peleaba. La no convencionalidad de la guerra, según la veían los militares, estaba en el centro de la “guerra sucia”. Era el principio de interpretación de la situación y de ese principio se desprendían todas las subsecuentes definiciones. Siguiendo el mismo razonamiento, el enemigo era no convencional, los

---

4. Roberto Viola, *La Razón*, 29 de mayo de 1979.

métodos y la estrategia para pelear la guerra eran no convencionales y así sucesivamente. Como bien expresa Canelo:

El “consenso antisubversivo” se basaba en un diagnóstico común sobre la naturaleza del enemigo, sobre la validez de los métodos “excepcionales” que debían ser empleados en su erradicación, y sobre la convicción de que la “masacre represiva” era necesaria, legítima y un verdadero “acto de servicio” (2008: 43).

La segunda particularidad era que esta guerra no convencional era una batalla de una supuesta “Tercera Guerra Mundial”. Tenía un carácter internacional porque era provocada por una “conspiración comunista” contra la civilización “occidental y cristiana”. Esta cruzada caracterizaba a su enemigo como ideológico, y era este carácter lo que provocaba incluso la pérdida de su nacionalidad. En palabras de Jorge Rafael Videla: “[y]o quiero significar que la ciudadanía argentina no es víctima de la represión. La represión es contra una minoría, a quien no consideramos argentina”.<sup>5</sup> Ideológicamente el enemigo estaba condenado “por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas”.<sup>6</sup>

En tercer lugar, desde el punto de vista estratégico, se debía encarar la guerra con una lógica global, opuesta a una parcial que implicaba la simple intervención militar. El Jefe de Estado Mayor General del Ejército, Gral. G. Suárez Mason, fue muy claro al respecto: “Ante el avance de una acción total por parte del marxismo es preciso tener

5. Jorge Rafael Videla, *La Prensa*, 18 de diciembre de 1977.

6. Jorge Rafael Videla, *Clarín*, 18 de diciembre de 1977.

una respuesta integral del Estado. Sería absurdo suponer que hemos ganado la guerra contra la subversión porque hemos eliminado su peligro armado”.<sup>7</sup> De esta manera, la intervención militar se postulaba como necesaria en una multiplicidad de contextos: el lugar de trabajo, el sistema educativo, los movimientos sociales, etc. Fue por eso que sindicatos, canales de televisión, organizaciones deportivas, etc., fueron intervenidos. Contra un enemigo que se encontraba presuntamente infiltrado en todos los intersticios sociales los métodos utilizados no podían ser los tradicionales.

En cuarto término, la no convencionalidad de la guerra también definía la constitución del enemigo. El enemigo estaba definido en términos vagos: “izquierdista”, “anti-argentino”, “incorregible”, “ideológico”, etc. (Frontalini y Caiati, 1984). Era enemigo porque la subversión solamente provenía del lado izquierdo del espectro ideológico. El terrorismo de derecha no era representado como terrorismo, sino como una “reacción natural de un cuerpo enfermo”:

Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del país está contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados de la misma manera que se considera un microbio. A medida que el gobierno controle y destruya a la guerrilla, la acción del anticuerpo va a desaparecer.<sup>8</sup>

7. *Clarín y La Prensa*, 6 de julio de 1979.

8. C. A. Guzzetti, *La Opinión*, 1 de octubre de 1976.

Reduciendo al “otro” a una patología social, el discurso del Proceso enmarcaba a su enemigo como potencial receptor de un “tratamiento”. La “extirpación del tejido enfermo” se volvió así la condición para el mantenimiento del discurso del Proceso. Esto implicaba lo que Corradi llamó sanciones, “que pueden ser caracterizadas como prácticas abyectas (expulsión, confinamiento, tortura, desaparición y exterminio)” (Corradi, 1997: 231). De este modo, la característica principal de la no convencionalidad presentada en el contenido literal del mito de la “guerra sucia” fue su ambigüedad. Este contenido era tan vagamente definido y sus límites eran tan borrosos que la población vivía en un estado de incertidumbre constante. Nadie sabía exactamente, ni siquiera los militares, qué era ser un enemigo o un subversivo, incluso “la ingenuidad y la indiferencia”<sup>9</sup> podían llegar a ser causa de complicidad subversiva. Esta vaguedad extendía cierto *velum* sobre la violencia represiva que al mismo tiempo era brutalmente afirmada en declaraciones como las de Ibérico Saint-Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires, al International Herald Tribune en mayo de 1977: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después... a sus simpatizantes, enseguida... a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos”.

El miedo y la falta de certezas mínimas tuvieron consecuencias sociopolíticas importantes. Cuando las formas de representación que estructuran la vida comunitaria no son claras, y cuando lo que está en juego es la vida y la seguridad de las personas, el resultado es una inmovilidad generalizada. Las consecuencias más importantes

---

9. A. E. Vilas, *La Opinión*, 25 de noviembre de 1976.

de la vaga definición del contenido de la “guerra sucia” fueron la desmovilización de los ciudadanos y la reducción de las actividades asociativas. El contenido del discurso actuó como un mecanismo de disuasión, y su vaguedad provocó parálisis política (Calveiro, 2008: 188). Al mismo tiempo, la incertidumbre dio lugar a la emergencia de estrategias egoístas de supervivencia que, a su vez, retroalimentaron la reducción de actividades asociativas. La sociedad argentina se transformó en una sociedad fragmentada.

En quinto lugar, la idea de “guerra sucia” implicaba la negación de la violencia cotidiana ejercida por la represión militar. Como explicó Graziano, esto transformó a la violencia en un “espectáculo abstracto” (Graziano, 1992: 73), en la representación de una ausencia cuya presencia era a la vez insistida (por ejemplo, por los espectaculares secuestros en la vía pública, el despliegue de fuerzas militares, etc.) y negada (el terrorismo de Estado, los secuestros, los tiroteos, eran oficialmente negados paralizando a una población desprotegida). Sin embargo, el carácter espectacular y público de la violencia comprometía a la población como observadora y participante. De este modo, el poder del violento discurso autoritario se multiplicó y provocó un sentimiento generalizado de sospecha. Es en este compromiso forzado por la violencia pública negada que debemos buscar el origen de las tristes y populares condenas anticipadas: “algo habrá/n hecho” o “por algo será”. El resultado de estas condenas, utilizadas para intentar explicar una detención ilegal o desaparición, fue que ser víctima de algún atropello automáticamente transformaba a la persona en culpable.

Una de las consecuencias de la represión ilegal fue entonces la destrucción de los vínculos sociales y de los espacios públicos disponibles para el reconocimiento de referencias colectivas. El resultado de la

no-convencionalidad de la “guerra sucia” fue una sociedad fragmentada, condicionada por el miedo y caracterizada por una desorganización y debilidad generalizadas de las identidades colectivas. Esto tuvo importantes consecuencias. La desorganización generalizada de la sociedad provocó una proliferación de antagonismos y diferencias que el Proceso no pudo luego rearticular. Una vez que el orden autoritario se instauró con las características que mencionábamos, el Proceso no pudo proveer nuevas formas de identificación. El discurso dictatorial de la Junta Militar no pudo reconstituir una forma de representación que fuera capaz de suturar las identificaciones que había coadyuvado a dislocar.

La Guerra de Malvinas fue una reacción a esta inhabilidad para rearticular el espacio político. La recuperación de las islas por parte de la dictadura militar puede ser comprendida como un intento de rearticular un espacio que se fragmentaba oponiendo a ese espacio una exterioridad antagonica encarnada en un enemigo ahora extranjero. Si el enemigo interno definido ambiguamente por el discurso de la “guerra sucia” era el “otro” del orden procesista, durante la guerra en el Atlántico Sur la dimensión de externalidad se encontró en el Reino Unido.

### **CRISIS DE LA DICTADURA: INTERNA MILITAR Y PARTIDOS POLÍTICOS**

Otro aspecto que es relevante al momento de pensar la relativa estructuralidad en la que se dispara la Guerra de Malvinas son los procesos políticos al interior de las Fuerzas Armadas y su relación con los partidos políticos. Hacia 1980, la política económica del gobierno militar se percibía como un fracaso e incluso grupos hasta ese momento cercanos al Proceso comenzaban a criticarlo abiertamente

y crecía el descontento social. En ese marco, asumió la presidencia del país Roberto Viola en marzo de 1981. Desde el inicio Viola dio muestras de pretender cambios tanto en la política económica como en la relación con los partidos políticos. Sin embargo, esos cambios nunca pudieron estabilizarse como objetivos de gobierno porque estaban condicionados por negociaciones políticas al interior de las Fuerzas Armadas. En este sentido, con la presidencia de Viola pudo verse una diferenciación dentro de la dictadura militar entre el propio Poder Ejecutivo y lo que Fontana llamó el “frente interno de las Fuerzas Armadas” (1984: 12). Este frente interno resistía las decisiones del gobierno, que se defendía a su vez haciendo referencia a la necesidad de cierta apertura ante el peligro de un estallido social. Según este mismo autor, esta facción interna de las Fuerzas Armadas “se constituyó así en una *oposición con características paralizantes y desestabilizantes*” (Fontana, 1984: 17). De alguna manera, existió una dualidad entre el poder militar y la gestión del gobierno. Por su parte, los partidos políticos convergían con el gobierno de Viola por su incipiente intento de liberalización política. Es más, también ellos blandían el peligro de un estallido civil como estrategia para evitar los embates y posicionamientos de los militares más duros opositores al gobierno y opuestos a cualquier posibilidad de apertura política. En diciembre de 1981, Viola fue reemplazado por Leopoldo Galtieri, referente del sector duro de las Fuerzas Armadas. Su nombramiento se percibió como una vuelta a los contenidos originales del Proceso, sobre todo a partir de la designación como ministro de Economía de Roberto Alemann, un economista ortodoxo que propuso un plan antiinflacionario similar en sus contenidos discursivos al de Martínez de Hoz. Por otra parte, Galtieri reflató el proyecto de creación

de una fuerza política heredera del Proceso, lo cual se encontró con las resistencias de la Multipartidaria, un organismo creado por los principales partidos políticos (Aboy Carlés, 2001: 166-167). A principios de marzo de 1982, la Multipartidaria organizó un acto en la ciudad de Paraná y comenzó a demandar la institucionalización del país. Esto coincidió con la emergencia de protestas gremiales en todo el país. Una de las partes en que estaba dividida la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT), la CGT-Brasil, llamó a una movilización para el 30 de marzo en una convocatoria que no interpelaba solamente a sus bases gremiales sino que convocaba a toda la población. La represión policial y militar fue violenta y muy criticada públicamente. Esta movilización es central para entender mejor la relativa estructuralidad que marcó el inicio de la guerra. Los sucesos del 30 de marzo de 1982 mostraron que el discurso del orden autoritario marcado por el terror de la represión estatal ilegal había perdido capacidad de articulación, sin poder proveer nuevas posibilidades identificatorias a los actores en danza. Esta incapacidad del Proceso para articular las fuerzas que ayudó a desacoplar caracterizó el contexto en el cual comenzó la transición argentina a la democracia.

## LA GUERRA DE MALVINAS

Analizar la Guerra de Malvinas de esta forma puede ayudar a entender mejor ciertos procesos que hoy parecen difíciles de explicar. ¿Cómo entender el contraste que representa el 30 de marzo con una Plaza de Mayo en la que se lanzaron gases lacrimógenos, hubo represión policial y militar, y miles de detenidos; y un mismo escenario en el que se vitoreó a quien había ordenado esa misma represión el 2 de

abril? También podemos preguntarnos sobre el apoyo a la guerra por parte de intelectuales, en el país o en el exilio, que no podían separar entre el reclamo soberano de la nación y el soberano que los reprimía. Incluso una de las organizaciones que estaban siendo reprimidas y desaparecidas por ese mismo soberano declaraba que sus miembros estaban dispuestos a sumarse al combate armado en contra del enemigo común. ¿Cómo interpretar “la desenfrenada carrera” a la que se sumaron el conjunto de la dirigencia política y sindical para demostrar su adhesión a la causa de Malvinas? (Aboy Carlés, 2001: 162). La complejidad de estos interrogantes reside en que no se pueden responder a través de un relevamiento de opinión. No sabemos si las personas que estuvieron en la plaza el 30 de marzo fueron las mismas que estuvieron el 2 de abril. Tampoco sería demasiado relevante saberlo. Lo que podemos preguntarnos es cuáles fueron las condiciones que habilitaron dichos sucesos. La situación sociopolítica en los primeros meses de 1982 era vivida con muchas tensiones y percibida como riesgosa por la mayoría de los actores. Esto sucede cuando los sujetos no encuentran posibilidades de identificación disponibles que establezcan la vida comunitaria y permitan reconstituir una realidad que aparece como dislocada. No existía una posición discursiva que lograra generar nuevas formas de identificación que permitiesen a los actores algún grado de pertenencia a algo común en un momento en que la vida comunitaria se encontraba desintegrada por los efectos de la violencia represiva ilegal y las transformaciones en la estructura productiva y laboral.

La Guerra de Malvinas ofreció esa oportunidad de identificación. Es importante considerar que Malvinas no era una posibilidad identificatoria más. Esto en dos sentidos. Primero, era una causa nacional

impregnada de un nacionalismo territorial que se había esparcido a través de los aparatos ideológicos de Estado durante toda la segunda mitad del siglo XX. Segundo, era una posibilidad identificatoria más fuerte aún que la identificación con el orden autoritario inicial del Proceso. En dicho orden autoritario la otredad, como veíamos en la sección anterior, era presentada de forma ambigua y vaga. Malvinas fue una posibilidad identificatoria que implicaba la clara definición de un otro heterogéneo al campo de la representación. El Proceso inicialmente funcionaba a partir de una lógica de ambigüación de la otredad, desdibujando esa frontera interna a lo social que separaba a la comunidad de lo “subversivo” y que solo era reconocible en el momento mismo de la intervención represiva. La forma que adoptó la hegemonización del espectro político por parte de la dictadura fue a partir del miedo y la amenaza del uso ilegal de la fuerza. En público aparecía como un gobierno que no respondía a demandas o presiones particulares, y en la ilegalidad reprimía cualquier intento de emergencia de dichas demandas. Esto borraba, como ya dijimos, cualquier posibilidad de extender cadenas de solidaridad más amplias entre los grupos y actores que eran parte de la formación política. La fragmentación de la que vinimos hablando aislaba a las demandas entre sí y les impedía generar solidaridades más extendidas con las cuales identificarse colectivamente.

A partir del 2 de abril, la Guerra de Malvinas ofreció una posibilidad identificatoria que rompió con esa ambigüedad en la articulación que proponía la dictadura. La figura del extranjero colonialista permitió que esos sectores populares fragmentados y reprimidos en su lugar de trabajo, esa intelectualidad y esos dirigentes políticos o sindicales perplejos y dubitativos en relación con qué posición tomar frente a

hechos que los sobrepasaban se identificaran como algo equivalente entre sí, generando ciertas relaciones de solidaridad discursiva. La presencia de esa exterioridad colonial negaba la plenitud de la vida comunitaria representada en el territorio irredento, a la vez que habilitaba la sensación de compartir algo común que había estado ausente hasta ese momento.

En síntesis, ante la crisis del tercer gobierno peronista, el Proceso constituyó una forma de identificación asentada en el terror y la incertidumbre generada por la ambigüedad de una violencia estatal ilegal presentada como una guerra no-convencional. Sin embargo, esas identificaciones se fueron desmoronando como consecuencia del propio accionar de la dictadura militar. De ese momento inicial donde lo primordial aparecía como el aseguramiento de la normalidad de la vida, se pasó a un momento en el que la situación se transformó. La represión y fragmentación por el ejercicio de la violencia política y las transformaciones en la esfera del trabajo por las políticas económicas generaron una explosión de diferencias que comenzaron a articularse alrededor del gobierno militar como exterioridad, como el lugar del poder que no lograba satisfacer su promesa de plenitud.<sup>10</sup> La Guerra de Malvinas primero funcionó como lógica contraria a esa dispersión y el Proceso se aseguró la sutura parcial de una articulación que tuvo como exterioridad al Reino Unido, pero ante el fracaso bélico esa explosión de diferencias volvió su cara hacia la experiencia brutal y sangrienta del gobierno militar.

10. La noción de exterior constitutivo implica una exterioridad al sistema de significados que al mismo tiempo niega la plenitud del sistema como tal y funciona como condición de posibilidad de su existencia (Laclau, 1990: 55-57).

A partir de la derrota en la guerra el propio Proceso pasó a encarnar ese exterior que ofrecía una posibilidad de identificación comunitaria. En un principio esa articulación que marcaba una clara frontera interna a la comunidad, frontera de la que la experiencia procesista quedaba del lado excluido, no tuvo un centro articulador que la encarnara. Solo fue a partir de la denuncia del pacto militar-sindical que comenzó una dinámica de estabilización de esa nueva articulación política que llevaría al alfonsinismo al gobierno (Aboy Carlés, 2001; Barros, 2002).

#### **LA SITUACIÓN POS-MALVINAS Y LA CRISIS DE LA DICTADURA**

Pasemos ahora a analizar las consecuencias políticas inmediatamente posteriores a la Guerra de Malvinas. La fragmentación y permeabilidad de las identidades provocadas por el Proceso se tradujeron, durante 1982 y más marcadamente en 1983, en el comienzo de una movilización social impensable durante los momentos más duros del gobierno militar. Como comentamos antes, el 30 de marzo de 1982 la CGT-Brasil convocó a la realización de un acto en Plaza de Mayo, bajo la consigna de “decir basta a este Proceso que ha logrado hambrear al pueblo sumiendo a miles de trabajadores en la indignencia y la desesperación”.

La fragmentación y permeabilidad de las identidades, inmersas en un contexto de crisis económica y política, produjeron un estallido de diferencias. Es decir, toda una serie de demandas comenzaron a expresarse ante la imposibilidad de identificarse con el discurso del orden autoritario disponible hasta ese momento. Así, los grupos empresarios que habían sido parte central en el dispositivo hegemónico de la dictadura comenzaron a reclamar por cambios en la política

económica cuando percibieron que la misma se inclinaba por favorecer al capital financiero y no a la industria. Y así sucesivamente con los discursos sindicales, de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, etc. Todos estos sujetos y discursos quedaron poco a poco, pero sistemáticamente, sin posibilidades identificatorias desde el discurso autoritario. El punto central en este análisis es que nos deja ver que, incluso en una comunidad fragmentada y con vínculos público-políticos deteriorados como la argentina de principios de los ochenta, la vida comunitaria debe ser representada de alguna manera. De otro modo, nos encontraríamos frente a la posibilidad de una dispersión aleatoria de esas diferencias, con lo cual no habría ninguna posibilidad de vida comunitaria.

Eso fue precisamente lo que ofreció la ocupación de las Islas Malvinas: un principio de representación que estaba disponible en la formación política argentina y que esa misma situación caótica producida por el gobierno militar habilitó como creíble. La Guerra de Malvinas transformó esa negatividad que impedía la realización plena de la comunidad ordenada, el enemigo interno subversivo definido en la no-convencionalidad de la “guerra sucia”, en un enemigo extranjero encarnado en el imperialismo británico. La maniobra fue en un principio exitosa. Con raras y contadas excepciones, una de ellas fue Raúl Alfonsín –quien después sería presidente de la República–, el cambio de escenario fue aceptado por la gran mayoría de los actores relevantes (Aboy Carlés, 2001: 170).

En otras palabras, la guerra permitió la rearticulación de nuevas cadenas de solidaridad entre diferencias dispares y conflictivas entre sí. Cadenas que se eslabonaban frente al enemigo externo y alrededor del gobierno militar. Ahora bien, todo lo que la nueva articula-

ción tuvo de exitosa, lo tuvo de efímera. La derrota militar de Malvinas no solo marcó su fin, sino que agudizó las características que venía insinuando la formación política argentina antes de abril de 1982. Ahora no solo los partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales pedían una pronta salida electoral. Desde el mismo gobierno militar se proponía un período de transición civil a la democracia, propuesta atravesada por las tribulaciones de una interna militar que se enrostraba las responsabilidades por la derrota militar. El 22 de junio de 1982 los militares anunciaron, en un mensaje de la Junta, que “esta etapa del Proceso deberá indefectiblemente concluir con la institucionalización del país en los primeros meses de 1984”.<sup>11</sup> La fragmentación y permeabilidad de las identidades también se agudizaron luego de la derrota militar. Lo que hace un momento caracterizábamos como explosión de diferencias puede ser ejemplificado con una breve revisión de lo que sucedía en la última semana de noviembre y las dos primeras de diciembre de 1982 (Barros, 2002). Allí se observa muy claramente cómo la movilización fue ganando en intensidad hasta llegar a un desenlace violento. Durante los últimos días de noviembre se repitieron manifestaciones de intereses muy particulares y focalizados. Por ejemplo, hubo movilizaciones populares en contra del alza de impuestos municipales en el conurbano bonaerense, se manifestaron deudores hipotecarios en la Plaza de Mayo, hubo protestas de jubilados, paros sindicales y, como corolario, la CGT-Brasil publicó un crítico documento y la Multipartidaria ratificó una marcha para mediados de diciembre. Incluso las fuerzas de seguridad comenzaban a dar muestras de intranquilidad. La policía

---

11. *La Nación*, 23 de junio de 1982.

de la provincia de Buenos Aires, arma importante en la represión ilegal, se organizó en defensa de sus salarios creando la ORGAPOL, un organismo que canalizaba las expresiones de protesta de la institución. El 6 de diciembre se realizó el primer paro general conjunto de las dos CGT, Azopardo y Brasil, que tuvo un acatamiento del 95 por ciento. El 10 de diciembre se inició la Marcha de la Resistencia convocada por las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de defensa de los derechos humanos, la cual tuvo una duración de 24 horas. El 14 se realizó una marcha de protesta por la reactivación del cine argentino, el 15 hubo paro de metalúrgicos y de señaleros, y para el 16 estaba convocada por la Multipartidaria la Marcha del Pueblo por la Democracia y la Constitución Nacional. Esta marcha terminó de manera violenta. Hubo un muerto, varias detenciones, destrozos y la Casa Rosada, sede del gobierno, fue apedreada. La lógica de la política argentina parecía transformarse en un círculo vicioso y la violencia seguía presente como posibilidad.<sup>12</sup>

Ante esta situación, el gobierno militar promovió continuamente llamados a la concertación. Esta vez la propuesta era esbozar los aspectos esenciales de un plan político, económico y social que regiría “hasta la institucionalización completa del país”.<sup>13</sup> Las pautas de la concertación eran la discusión sobre el tratamiento que se le daría a la desaparición de personas, la investigación de la conducción política que dirigió la Guerra de Malvinas (no la actuación militar), el plan económico y social para evitar un cambio brusco con el nuevo gobierno y la estabilidad y continuidad de los magistrados por uno o dos

12. Ver *La Nación*, 25, 27, 29 y 30 de noviembre de 1982 y 7 de diciembre de 1982.

13. *La Nación*, 2 de noviembre de 1982.

años. Sin embargo, esta idea de hacer lo menos traumática posible la transición a un gobierno civil se encontró con la rotunda negativa de la mayoría de los sectores políticos. Lo peculiar de esta negativa fue que los dirigentes políticos se resistían a concurrir todos juntos a las reuniones promovidas por los militares, pero —y como una muestra más de la pérdida de toda capacidad articularia de la dictadura— concurrían, sin embargo, a los llamados del gobierno cada uno por separado y para conversar sobre los mismos temas.

De esta manera, los intentos por rearticular el campo dislocado provocaron un resultado totalmente opuesto. En lugar de apaciguar el antagonismo de los elementos que se negaban a compartir la mesa de negociaciones, el proyecto de concertación abrió nuevos espacios de confrontación y oposición al Proceso. Más que limitar la aparición de nuevos antagonismos, el proyecto llevó a una proliferación y profundización de las relaciones antagónicas existentes y, en última instancia, a un cambio en la articulación de la formación política. Frente a la explosión de la movilización política, que se agudizó luego de la derrota de Malvinas, el Proceso se transformó en la exterioridad constitutiva de una nueva articulación política, aunque a mediados de 1982 esta no estaba articulada de forma estable. No existía una fuerza política en particular que hegemonizara y diera dirección a la vida comunitaria. Tampoco existía un tema en torno al cual las fuerzas políticas se aglutinaran en contra del Proceso. El único punto en común era la negación de la experiencia procesista en sí misma. Durante el período que fue desde fines de junio de 1982 hasta las elecciones de 1983, todas las fuerzas políticas confluían en un mismo y único punto: su oposición al régimen militar. El poder del Proceso en este momento no contaba como el instrumento represivo de una

posición particular, sino como “la pura anti-comunidad”, la negación y el mal en su máxima expresión (Laclau, 1996: 42).

Las posiciones más importantes en este sistema eran la Multipartidaria, las dos CGT que existían en el momento, las agrupaciones defensoras de los derechos humanos y los sectores de la derecha liberal que, hasta poco tiempo atrás, eran partidarios del Proceso. Todas ellas, de una manera u otra, se oponían a cualquier medida del gobierno que se pudiera mostrar como entorpeciendo la salida electoral del país sin condicionamientos militares. Sin embargo, era claro que este sistema de equivalencias no estaba hegemónicamente articulado. Era un sistema en tanto tenía los límites dados por la negación de la experiencia procesista, pero ninguna de las posiciones lograba articular en torno a sí misma a las demás.

## REFLEXIONES FINALES

Como argumentamos al principio de este trabajo, no es pensando en términos de causas y efectos que podemos precisar las consecuencias políticas de la Guerra de Malvinas. Por lo tanto, la mirada que se ofreció aquí postula que el análisis político debe centrarse en las condiciones de posibilidad de ciertos procesos o comportamientos para reconocer allí ciertas relaciones de sobredeterminación por parte de una relativa estructuralidad que limita y posibilita a la vez su desarrollo. De esta forma, pudimos argumentar que las condiciones de posibilidad que sobredeterminaron el carácter que asumieron los procesos que desembocaron en la toma de las islas y sus consecuencias fueron la fragmentación y debilitamiento de las formas de identificación políticas imperantes en la época.

El carácter que asumieron esas condiciones se desprendió de dos contenidos discursivos que estructuraron la toma de decisiones del gobierno procesista. Así es que analizamos, en primer lugar, el discurso de la “guerra sucia” y cómo el carácter no-convencional de la representación dictatorial de la misma tuvo consecuencias sobre las formas de la represión estatal ilegal y afectó la forma de articulación política del discurso del Proceso. Prácticamente lo mismo sucedió con los efectos económicos que tuvo el discurso liberalizante del gobierno militar en materia económica. En este caso, la fragmentación y debilitamiento de las identificaciones políticas imperantes fueron consecuencia del deterioro de la estructura productiva. Esto llevó a cambios en la organización del trabajo y produjo recesión y desindustrialización. La lucha en contra de la suba de los índices inflacionarios marcó la política económica del Proceso y fue un fracaso, y es en ese fracaso donde se pueden rastrear sus consecuencias más relevantes.

La fragmentación y debilitamiento de las identificaciones políticas produjo una explosión de diferencias que dificultaba la constitución de relaciones de solidaridad discursiva más amplias que permitiesen, a su vez, dar un sentido común a esa vida comunitaria desintegrada por la represión estatal ilegal y los efectos de la política económica. Cuando el Proceso era incapaz de generar esas posibilidades identificatorias fue que se produjo el desembarco a las Islas Malvinas.

Las Malvinas comenzaron así a funcionar como el punto en el cual se podía reconocer algo común en ese contexto de dispersión y fragmentación que describimos. De allí el inicial éxito de la dictadura y el casi total apoyo que recibió por parte de sectores muy diversos de la formación política. La guerra funcionó inicialmente entonces como

un antídoto a la dispersión, pero ante la derrota militar esa explosión de diferencias se volvió sobre la experiencia brutal y sangrienta de la dictadura. A partir de ese momento el Proceso pasó a encarnar la idea misma de anticomunidad.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abós, A. (1984). *Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)*. Buenos Aires: CEAL.
- Aboy Carlés, G. (2001). *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*. Rosario: Homo Sapiens.
- Barros, S. (2002). *Orden, democracia y estabilidad. Discurso y política en la Argentina entre 1976 y 1991*. Córdoba: Alción.
- Calveiro, P. (2008). La experiencia concentracionaria. En C. Lida, H. Crespo, y P. Yankelevich (comps.), *Argentina 1976. Estudios en torno al golpe de Estado* (pp. 187-204). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México.
- Canelo, P. (2008). *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires: Prometeo.
- Castellani, A. G. (2008). Intervención económica estatal y transformaciones en la cúpula empresaria durante la última dictadura militar (1976-1983). En C. Lida, H. Crespo y P. Yankelevich (comps.), *Argentina 1976. Estudios en torno al golpe de Estado* (pp. 131-164). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México.
- Canitrot, A. (1980). Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionaria y apertura económica en la Argentina, 1976-1981. *Estudios CEDES*, 3(10).
- Corradi, J. (1997). Military government and state terrorism in Argentina. En B. Loveman y T. Davies (eds.), *The Politics of Antipolitics. The Mi-*

- litary in Latin America* (pp. 228-238). Wilmington, Delaware: Scholarly Resources.
- Fontana, A. (1984). *Fuerzas armadas, partidos políticos y transición a la democracia en Argentina*. Buenos Aires: CEDES.
- Frontalini, D. y Caiati, M. (1984). *El mito de la guerra sucia*. Buenos Aires: Ediciones CELS.
- Graziano, F. (1992). *Divine Violence: Spectacle, Psychosexuality, & Radical Christianity in the Argentine "Dirty War"*. Boulder: Westview Press.
- Laclau, E. (1990). *New Reflections on the Revolution of Our Time*. Londres: Verso.
- (1996). *Emancipation(s)*. Londres: Verso.
- Martínez de Hoz, J. (1981). *Bases para una Argentina moderna*. Buenos Aires: s/e.
- Villarreal, J. (1987). Changes in Argentine society: the heritage of the dictatorship. En M. Peralta Ramos y C. Waisman (eds.), *From Military Rule to Liberal Democracy in Argentina* (pp. 69-96). Boulder: Westview Press.